

EDUCACIÓN, MEDIOS Y POLÍTICA:
UNA ESFERA PÚBLICA DELIBERATIVA PARA
EL DEBATE EDUCACIONAL

Cristian Cabalin Quijada

CRISTIAN CABALIN QUIJADA

Periodista y Magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. Candidato a Doctor en Estudios de Políticas Educativas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Profesor asistente del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

EDUCACIÓN, MEDIOS Y POLÍTICA: UNA ESFERA PÚBLICA DELIBERATIVA PARA EL DEBATE EDUCACIONAL

INTRODUCCIÓN

“El lugar que en Chile ocupa la discusión educativa es una particularidad”, señaló el exministro de Educación de Argentina, Juan Carlos Tedesco¹⁰. El exsecretario de Estado trasandino intentaba ilustrar con esta aseveración que en muy pocos países la educación concentra con tal intensidad la atención pública. Esto se puede explicar porque la educación es uno de los pocos espacios en el país donde aún es posible el debate ideológico.

La educación se ha convertido en un lugar de disputa para los diversos actores políticos. Ciertamente, esto ha enriquecido la esfera pública, porque ahora se discute abiertamente sobre la posibilidad o no de lucrar con la educación o si todas las universidades pueden ser consideradas públicas por el simple hecho de proveer el servicio educacional. Hace unos años parecía una obviedad que la educación fuera tratada como un bien de consumo; hoy, quienes defienden esa idea al menos deben esforzarse en argumentarla, aunque sea muy débilmente.

Quizás este es uno de los mayores triunfos de los estudiantes, quienes iniciaron sus movilizaciones en 2006 con la Revolución de los Pingüinos y las intensificaron en 2011 con un gran movimiento social por la educación. Los estudiantes asumieron su rol como actores políticos y remecieron la agenda pública. Los diversos sectores reaccionaron para apoyar o contrarrestar las demandas estudiantiles. Los medios de comunicación, en general, y los principales conglomerados de la prensa escrita, en particular, pasaron también a la ofensiva para nutrir la discusión pública sobre la educación, demostrando que los medios son también actores políticos en la definición de las políticas públicas.

10 Entrevista en el diario *La Tercera*, 18 de agosto de 2014, páginas 20 y 21.

Considerando lo anterior, en este artículo se propone una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas educacionales. Los medios son constructores de la esfera pública, donde los distintos sectores intentan imponer determinadas soluciones a los problemas sociales. En un contexto de discusión sobre los cambios educacionales que Chile requiere, analizar críticamente cómo se articulan estos espacios comunicativos resulta fundamental.

LOS MEDIOS Y LA ESFERA PÚBLICA POLÍTICA

Los medios de comunicación son parte constitutiva de la sociedad moderna. Tal como Appadurai (2003) señala, las nociones de tiempo y espacio, las identidades locales y globales y las relaciones sociales a toda escala han sido impactadas por los medios masivos de comunicación. Este *media landscape*, usando uno de sus términos, es una de las características de la globalización debido a los incesantes flujos de información transnacionales.

Además, los medios han sido fundamentales para la expansión de las fronteras del conocimiento tanto como lo fue el surgimiento de la prensa para el desarrollo de la democracia y el Estado moderno. El periodismo ayudó a conformar comunidades interesadas en los asuntos públicos, fortaleció los procesos de construcción de una memoria histórica que el Estado-nación necesitaba y diseñó lo que hoy conocemos como esfera pública (Carey, 2007).

En esta esfera pública, cada vez más compleja, extendida y sinuosa, se sitúa el espacio deliberativo que caracteriza –en teoría– a un sistema democrático de gobierno. Es ahí donde se tensionan las relaciones de poder y negociación entre los diferentes actores sociales. La prensa participa, pero a la vez modela las discusiones públicas. Por eso, la relación entre la prensa y el poder se ha constituido en uno de los puntos más críticos para el ejercicio del periodismo y el funcionamiento de los medios de comunicación. Esto, porque existe consenso sobre el impacto positivo de una prensa libre y vigilante en la democracia. Un sistema de medios plural y diverso resulta fundamental para el propósito deliberativo. De acuerdo con la visión republicana de la opinión pública, ciudadanos bien informados son fundamentales para construir la democracia. Por eso, es en la opinión pública donde las decisiones políticas deben ser debatidas y puestas en escrutinio.

Los medios no sólo actúan como un foro público, sino que además son productores de sentido sobre los hechos sociales. La construcción social de la realidad por los medios masivos de comunicación es un proceso de producción, circulación y reconocimiento (Rodrigo Alsina, 1999). Este proceso tiene a la

información como su principal elemento. Con ella se configura la opinión pública, que permite la convergencia de los distintos actores sociales, quienes se deben ajustar a la selectividad de los propios medios para ser parte de las comunicaciones que estos producen. Esta operación de selección y de tematización condensa las semánticas que los medios masivos de comunicación establecen en el espacio de comunicaciones posibles dentro de la opinión pública. Esto, desde la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas (1990), se traduce en la necesidad de ampliar los espacios de deliberación para que los actores sociales den razones a sus actos y logren el entendimiento. Si en la democracia debe convivir la diferencia, los medios masivos de comunicación deben hacerse cargo de esa premisa.

La mediatización de la sociedad supone que las comunicaciones fluyen incesantemente en la opinión pública, que –según Habermas (1986)– tiene su origen en el desarrollo del capitalismo temprano, específicamente con el tráfico de mercancías y noticias. Con esta nueva estructura de comunicaciones y de administración del poder, se objetiviza la presencia de una esfera pública. Es decir, los medios de comunicación, especialmente la prensa, transforman al lector o simple receptor, en un “lector juez” de las acciones de los personajes públicos (Habermas, 1986). Es lo que actualmente se denomina como control ciudadano de los actos públicos del sistema político. Y estos mecanismos de vigilancia se dan principalmente en los medios de comunicación y en la opinión pública. El espacio público de comunicaciones constituye así la principal fuente de legitimación de la democracia.

Siguiendo a Habermas (1998), “el espacio de la opinión pública... es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de posturas, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos” (pág. 444). Para que este proceso sea posible, se requiere un alto grado de tematización, es decir, que la discusión sobre los problemas sociales y sus posibles soluciones sea amplia e inclusiva, donde los potencialmente afectados por las políticas públicas estén incorporados. Este es el reclamo permanente, por ejemplo, de los estudiantes movilizadas, quienes exigen que su voz y planteamientos sean considerados de manera vinculante en el proceso de toma de decisiones. Es ahí donde se forma la influencia de los distintos actores, produciendo la “diferenciación entre los diversos oradores y oyentes, entre arena y galería, entre escenario y espacio de espectadores” (Habermas, 1998, pág. 447). Cuando las políticas públicas son vaciadas de contenido político y prevalece la técnica, los expertos se constituyen a sí mismos como los oradores privilegiados en la discusión, excluyendo al resto de los interesados en el diseño e implementación de las políticas. La hegemonía tecnocrática convierte el

debate sobre las políticas públicas en un asunto de especialistas y no en un tema ciudadano.

Los medios de comunicación también contribuyen a esa jerarquización de los discursos, privilegiando y validando algunas narrativas. Además, como hemos dicho, los medios son actores políticos en la construcción de los problemas sociales. Para entender este proceso, a continuación se presenta la teoría de la mediatización y su impacto en el campo educacional.

LA MEDIATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

La teoría de la mediatización proporciona un marco conceptual para entender el rol protagónico de los medios de comunicación en las prácticas de las personas y en el desarrollo de las instituciones. Livingstone (2009a) ha señalado que ‘mediatización’ y ‘mediación’, como conceptos analíticos, se han superpuesto en el contexto de una nueva terminología para el estudio del poder mediático en un mundo globalizado. En este artículo se asume la noción de mediatización que “refiere al proceso por el cual las prácticas cotidianas y las relaciones sociales se forman históricamente en función de los medios de comunicación” (Livingstone, 2009b, p. X). Por el contrario, mediación es una característica inicial de los efectos de los medios de comunicación en la sociedad, cuando se extendieron las posibilidades de la comunicación modificando la relación tiempo-espacio en el intercambio de mensajes. Se trata de la función de transmisión de los medios de comunicación (Schulz, 2004). Por ejemplo, en política, esto implica que “los medios de comunicación median entre la ciudadanía, por un lado, y las instituciones que participan en el gobierno, los procesos electorales y en la formación de la opinión pública, por el otro” (Strömbäck, 2008, pág. 230). Fairclough (2006) entiende la mediación como el movimiento constante de significados desde un campo hacia otro, asignando a los medios de comunicación un papel importante en la construcción de nuevos significados en las relaciones sociales. Esta definición de Fairclough se relaciona con la noción de mediatización que amplía la comprensión del rol de los medios en los cambios sociales.

Couldry (2012) señala que este fenómeno “apunta a los cambios de las dimensiones del mundo social en la era de los medios. A través del concepto de mediatización reconocemos a los medios de comunicación como una dimensión *irreductible* de todos los procesos sociales” (pág. 137, énfasis en el original). El campo de la educación es parte también de esta dimensión irreductible, tal como la mediatización de las políticas educacionales ha demostrado.

Cuando nos referimos a la mediatización de la educación, damos cuenta de una creciente interacción entre los campos educacional y mediático. En la arquitectura

global de la educación (Jones, 2007), los medios desempeñan un papel crucial en la promoción de las políticas educacionales neoliberales (Mockler, 2013). Los medios de comunicación pueden ser considerados corporaciones económicas, pero también actores políticos en la definición y construcción de un determinado tipo de sociedad. Más allá de la discusión sobre la profundidad o la amplitud de su influencia, hay consenso en que los medios de comunicación articulan y distribuyen mensajes que existen en el ámbito social e influyen en la importancia de los asuntos de los diferentes campos. De hecho, como Rizvi y Lingard (2010) han señalado, el impacto de los medios en las políticas educativas es altísimo, porque ahora los procesos de mediatización afectan la “circulación de las ideas sobre las políticas educacionales” (pág. 39). En otras palabras, los medios producen y circulan narrativas sobre la educación que alteran sus prácticas.

Los medios son, entonces, un sitio de producción de discursos sobre las políticas educacionales. En este sentido, algunos autores han estudiado los discursos sobre el género en el sistema escolar durante la promoción de ciertas reformas educacionales. Por ejemplo, Mills (2004) analizó cómo los directores de escuela de una pequeña región de Australia utilizaron los medios de comunicación para discutir la pertinencia de los colegios de sólo hombres o de sólo mujeres. Detectó que una escuela femenina privada usó una estrategia de *marketing* basada en el discurso peyorativo sobre los niños, para atraer más niñas y evitar su matrícula en colegios mixtos. Mills (2004) señala que los niños fueron representados como los responsables de los problemas de las escuelas, en una estrategia discursiva que combinó “el feminismo liberal junto con el sesgo de clase neoliberal, que denigró implícitamente a la educación impartida por las escuelas públicas” (pág. 343). Por su parte, un estudio sobre la cobertura realizada por los principales diarios de Argentina a la implementación de una reforma educacional concluyó que el tratamiento periodístico de la reforma reiteró la jerarquía tradicional de género, minimizando el rol de las mujeres (Robert, 2012).

Además, la cobertura periodística del sector educacional muchas veces refuerza el actual carácter competitivo de la educación neoliberal. Por ejemplo, en un análisis de los artículos y editoriales sobre los resultados de las pruebas PISA y TIMSS publicados en periódicos nacionales y locales de los Estados Unidos, Stack (2007) indica que cuando se presentan malos resultados en este tipo de exámenes, los medios de comunicación proporcionan recomendaciones formuladas por empresas y organismos gubernamentales sin un análisis crítico de estas soluciones. Además, los “malos maestros” son señalados como culpables de los resultados deficientes, contribuyendo a la construcción de una imagen pública negativa de los profesores.

Los estudios mencionados confirman que los medios de comunicación son un sitio para la producción de discursos y representaciones sobre los actores

educacionales y el sistema educativo en su conjunto. Para ilustrar este punto, en la siguiente sección se presenta un ejercicio de análisis crítico del discurso político de un editorial publicado por *El Mercurio* sobre la gratuidad en educación superior en pleno movimiento estudiantil de 2011.

UN DISCURSO POLÍTICO-EDUCACIONAL

Para este breve ejercicio de análisis se utilizó la propuesta de análisis crítico de Fairclough y Fairclough (2012), quienes señalan que un discurso político es un acto de poder porque provee un determinado curso de acción. Su modelo se basa en el análisis de los argumentos prácticos que utilizan los actores políticos para justificar sus posturas y convencer a otros actores. Entonces, es necesario identificar los objetivos de los argumentos que se expresan en premisas sobre un futuro imaginado o estado futuro de las cosas. Estos objetivos implican ciertas acciones, que no son independientes de los valores en juego (Fairclough y Fairclough, 2012). Así, un argumento práctico está constituido por afirmaciones, circunstancias, problemas y objetivos (medios, fines y valores).

En este análisis se asume que el editorial de un periódico es un discurso político, porque en él está contenida la postura ideológica y la toma de posición del medio en un asunto de interés público. Además, se considera al propio diario, en este caso *El Mercurio*, como un actor político en el debate educacional. El contexto histórico-político del editorial analizado es el movimiento estudiantil de 2011 que se extendió por siete meses y cambió la agenda pública en educación.

Editorial: **Gratuidad y Educación Superior**, *El Mercurio*, 2 de julio de 2011, pág. A3.

Afirmación: La gratuidad propuesta por los estudiantes es una mala política pública, porque es regresiva y poco realista. Extractos:

Entre los planteamientos de los estudiantes movilizados se encuentra la gratuidad de la educación superior. El Consejo de Rectores, si bien no ha llegado tan lejos, insiste en mayores ayudas estudiantiles y becas. Sería esa una política socialmente regresiva, que no le conviene promover al país.

Es cierto que existen países, en particular europeos, en que las universidades estatales no cobran a sus estudiantes, o los cobros son reducidos. Eso no significa que esa sea una política hoy realista y, desde luego, recibe muchos cuestionamientos de parte de expertos e incluso del mundo político de izquierda y derecha.

Circunstancias: La gratuidad sería injusta, porque los estudiantes de mayores ingresos tienen mayor participación en el sistema. También los egresados obtienen

mejores salarios en comparación con quienes no asistieron a la educación superior. Extracto:

En el 20 por ciento más pobre la tasa bruta de matrícula en educación superior es un cuarto de la observada en el quintil de mayores ingresos... Los egresados de la educación superior suelen tener ingresos mucho más elevados que aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder a aquélla... Desde el punto de vista social, esos recursos rendirían mucho más en otros niveles educacionales.

Problemas: Si ya la educación gratuita sería una mala política pública, sus deficiencias se acentúan si sólo se considera a las universidades estatales como beneficiarias. Extracto:

Más inconveniente aún se hace este cuadro cuando se plantea que la gratuidad debe ser sólo para quienes estudian en universidades estatales. Es una discriminación injusta e inequitativa. Plantear esto revela, una vez más, que muchas de las exigencias reflejan más bien intereses particulares antes que la demanda por buenas políticas públicas.

Objetivos (medios, fines y valores): Evitar una mala política pública y la discriminación a los estudiantes de instituciones privadas. Otorgar créditos y, en casos excepcionales, becas. Extractos:

En el caso de los estudiantes que carecen de los recursos para financiar los aranceles de la educación superior, el mecanismo preferente de apoyo debería ser el crédito, que no debe ser discriminatorio y a tasas de interés lo más bajas posibles.

Este mecanismo general se podría complementar con becas a los más necesitados, particularmente al inicio de los estudios, pero es discutible que ellas deban cubrir toda la duración de la carrera, como ocurre en la actualidad.

La reconstrucción del argumento práctico entregado por *El Mercurio* para oponerse a la gratuidad en la educación superior permite advertir cómo los medios de comunicación proponen políticas educacionales y cuáles son las posiciones que defienden. Para *El Mercurio*, paradójicamente, la educación gratuita a nivel terciario sería un acto de injusticia. Se apela a la técnica que debe inspirar a las políticas de los gobiernos para trazar una línea entre una buena política pública y una mala política pública. La racionalidad económica coloniza los juicios educativos o sociales, porque no hay referencias a la educación entendida como un derecho, sino más bien como una inversión personal con una alta rentabilidad. Esta manera de concebir a la educación es una característica común en los discursos neoliberales.

Además, *El Mercurio* cuestiona el trato preferente que podrían recibir las universidades estatales con políticas como las que los estudiantes proponen. Se apela a una supuesta discriminación en contra de los estudiantes de las instituciones privadas, para impedir que el Estado asuma un rol protagónico en el desarrollo de sus universidades. Esta crítica está en la línea de la defensa del Estado subsidiario

que financia la educación a través de la demanda y la competencia. Por eso, el diario propone otorgar créditos y en algunos casos becas, sólo cuando se reúnen condiciones de extrema vulnerabilidad y por un tiempo acotado de cobertura. Además, se cuestiona el verdadero sentido que inspira a los estudiantes movilizados, pues para *El Mercurio*, más que una preocupación por lo público, existiría una defensa de intereses particulares expresada en el apoyo a las universidades estatales.

Tan importante como lo manifiesto, en los discursos también lo oculto es relevante. En el editorial, *El Mercurio* omite que la educación superior en Chile es una de las más caras del mundo y que la gran carga económica es traspasada a las familias. Tampoco existe mención alguna a la desigualdad estructural que se reproduce en el sistema educacional. Se indica que los estudiantes de menores ingresos acceden a la educación superior en una baja proporción, pero no se señala cuáles son las razones de esta inequidad ni cómo se repara. Así, los problemas del sistema de educación superior son reducidos a un asunto de financiamiento, donde sólo importa seleccionar el mecanismo más apropiado, siguiendo una línea tecnocrática en el diseño de las políticas públicas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Como hemos revisado en este artículo, los medios articulan las comunicaciones presentes en el espacio de la opinión pública. Un sistema democrático de gobierno supone un espacio de deliberación plural y diverso, donde los actores políticos y, sobre todo, los afectados por las políticas públicas tienen la posibilidad de participar de este debate. Para que eso ocurra se requiere de un sistema de medios de comunicación que contenga y distribuya los distintos discursos presentes en la sociedad, sin exclusiones arbitrarias.

En el caso de la educación, que se ha constituido en uno de los campos sociales con las mayores controversias en la actualidad, los medios actúan como productores de sentido e intentan influir en el diseño de las políticas educacionales. Los medios, sobre todo la prensa escrita, no son actores neutrales en la definición de los problemas sociales que requieren de las soluciones provistas por las políticas públicas. Los medios son partes interesadas en el debate y construyen representaciones de los actores educacionales y del sistema en su conjunto con la pretensión de promover ciertos caminos de acción.

A través de la mediatización de la educación, los medios actúan en los diferentes contextos de las políticas educacionales promoviendo ciertos valores y rechazando otros. Para ello, legitiman algunos discursos sobre las políticas y neutralizan los opuestos, afectando la circulación de las ideas en el campo educacional. Según

Ball y Junemann (2012), la producción y la administración de las políticas públicas han cambiado desde una burocracia estatal centralizada a redes de “comunidades políticas”. Estas nuevas comunidades están formadas por “intelectuales políticos”, empresas educacionales, instituciones educativas, organismos supranacionales y por los principales medios de comunicación. Es en estas comunidades donde se validan los discursos sobre las políticas educacionales y se establecen los límites de los cambios posibles en el sistema.

Para extender esos límites, se requiere de una esfera pública deliberativa que permita la construcción democrática de las políticas educacionales. Una mayor presencia de medios de comunicación ayudaría a este objetivo, pero también la incorporación de los diversos actores políticos a la arena pública. Considerando que las políticas públicas son más que intervenciones técnicas de los gobiernos y se constituyen también en proyectos para el establecimiento de un cierto tipo de sociedad, estas deben ser analizadas, criticadas y evaluadas democráticamente. Un espacio para este debate se encuentra, entonces, en los medios de comunicación y en la esfera pública.

REFERENCIAS

- Appadurai, A. (2003). *Modernity at large. Cultural dimensions of globalization* (6th ed.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Ball, S. J., & Junemann, C. (2012). *Networks, new governance and education*. Bristol, UK: The Policy Press.
- Carey, J. (2007). A short history of journalism for journalists: A proposal and essay. *The International Journal of Press/Politics*, 12(1), 3-16.
- Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Cambridge: Polity Press.
- Fairclough, I., & Fairclough, N. (2012). *Political discourse analysis: A method for advanced students*. New York, NY: Routledge.
- Fairclough, N. (2006). *Language and globalization*. New York: Routledge.
- Habermas, J. (1986). *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Habermas, J. (1990). *Teoría de la acción comunicativa*. Madrid: Taurus.
- Habermas, J. (1998). Sobre el papel de la sociedad civil y de la opinión pública política. En *Facticidad y validez* (págs. 407-468). Madrid: Trotta.
- Jones, P. W. (2007). Education and world order. *Comparative Education*, 43(3), 325-337.

- Livingstone, S. (2009a). On the mediation of everything: ICA presidential address 2008. *Journal of Communication*, 59(1), 1-18.
- Livingstone, S. (2009b). Foreword: Coming to terms with 'mediatization'. In K. Lundby (Ed.). *Mediatization: Concept, changes, consequences* (pp. ix-xi). New York, NY: Peter Lang.
- Mills, M. (2004). The media, marketing, and single sex schooling. *Journal of Education Policy*, 19(3), 343-344.
- Mockler, N. (2013). Reporting the 'education revolution': MySchool.edu.au in the print media. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 34(1), 1-16.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. New York: Routledge.
- Robert, S. A. (2012). (En)gendering responsibility: A critical news analysis of Argentina's education reform, 2001-2002. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 33(4), 485-498.
- Rodrigo Alsina, M. (1999). *La construcción de la noticia*. Barcelona: Paidós.
- Schulz, W. (2004). Reconstructing mediatization as an analytical concept. *European Journal of Communication*, 19(1), 87-101.
- Stack, M. (2007). Representing school success and failure: Media coverage of international tests. *Policy Futures in Education*, 5(1), 100-110.
- Strömbäck, J. (2008). Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of politics. *The International Journal of Press/Politics*, 13(3), 228-246.